



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 3792 / 2025 - AML

Autos: “OVNISA S.A. c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte Nro. 3792/2025

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

1) Surge de autos que mediante la Resolución N ° 2024-2813-E-AFIP -DEIMPR#SDGTLSS, la Administración Federal de Ingresos Públicos, no hizo lugar a la solicitud de revisión formulada por la contribuyente OVNISA S.A, contra la Resolución N° 2023-254-E-AFIP-DVJUDB#SDGTLSS, notificada el día 24/05/2023; ratificando la deuda y multa labradas bajo el marco de la orden de Intervención N° 2.071.044, en los términos expuestos en el dictamen que antecede.

De todo ello, se notificó a la contribuyente, haciéndosele saber que la resolución era susceptible de ser revisada por medio del procedimiento establecido en el punto 8 de la Resolución 79/98 AFIP, o por la vía del recurso de apelación ante esta Alzada, debiendo depositar dentro de los plazos correspondientes el importe resultante de la resolución administrativa (cfr. art. 15 de la ley 18.820 y art. 39 bis del decreto-ley 1285/58 modificada por la ley 24.463).

Conforme se desprende de las presentes actuaciones, la parte actora recurre a esta instancia judicial, sin efectuar el pago previo a la apelación como requisito de admisibilidad. En su reemplazo, el organismo fiscal mediante Nota N° 26/2025 informa que, la recurrente ofreció seguro de caución, de acuerdo con la póliza emitida por Integrity Seguros Argentina S.A.

Al respecto, esta Sala en autos “Parflik S.A.C.I.F.I.A.”, de conformidad con las conclusiones expuestas en el dictamen del Sr. Fiscal General N° 4935/93 (Fiscalía General N° 2) de fecha 22/12/93, sostuvo que el depósito previo a la apelación que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido. (SD 57.859, del 14/4/94). En idéntico sentido, la Sala II en autos “Compañía de Servicios Hoteleros S.A. c/ AFIP – DGI s/ Impugnación de deuda”, SD 110.602, la Sala III en autos “Treves Argentina S.A. c/ AFIP – DGI s/ Impugnación de deuda y esta Sala I en autos “Frigorífico Gorina S.A.I.C. c/ A.F.I.P. – D.G.I s/ Impugnación de deuda”, SD 124.944.



En consecuencia, la fianza acompañada, garantiza el pago de las obligaciones reclamadas, en virtud del principio “solve et repete”, por lo que debe eximirse al recurrente de la carga impuesta en la normativa reseñada y declarar formalmente admisible el recurso.

2) La parte actora se agravia de la resolución recurrida, y solicita la nulidad del acta de inspección, al considerar que la presunta deuda que se ventila en autos tendría una base absolutamente falsa y no sustentada en elementos comprobados. Considera que la relación laboral endilgada respecto al Sr. Vestilleiro es inexistente. Agrega que se acompañó acta notarial en donde la persona relevada, declara de manera espontánea que mantenía un vínculo laboral con R&B Logística SRL y no con OVNISA S.A. Señala que la primera de las empresas mencionadas, tal se comprometiera en el acta notarial, registró a su empleado y regularizó los aportes de la seguridad social en los períodos reclamados. Finalmente argumenta sobre la improcedencia de la multa, al considerar que no ha existido conducta antijurídica pasible de sanción.

3) Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado.

Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excma. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa.

Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

4) Las presentes actuaciones tienen su origen en el relevamiento de personal realizado por personal del organismo fiscal, en el establecimiento comercial perteneciente a la apelante.

En oportunidad del relevamiento, fueron encuestado un supuesto trabajador Vestelleiro, Nicolás Ezequiel quien declaró trabajar para OVNISA S.A como “chofer logística” desde 10/2020, de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 hs, recibiendo órdenes del encargado percibiendo una remuneración de \$40.000, mensuales y en efectivo.

Sentado ello y preliminarmente, se advierte en autos que, la recurrente no logra desvirtuar los fundamentos con que se dictó la resolución que recurre.

Ello así, además de efectuar exactas consideraciones que en los recursos administrativos, la prueba a la que alude como rechazada por el Fisco, debe resultar relativa a hechos conducentes para la resolución de la causa, sin que este concepto pueda confundirse con la pertinencia, admisibilidad y atendibilidad de la misma. De este modo, debe existir relación con los hechos sobre los que versa el objeto probatorio. Y además, la prueba, debe resultar lo suficientemente eficaz para crear, en un caso concreto, la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos.

De esta manera, toda vez que este tribunal tiene dicho que, comparte el criterio del valor probatorio de las manifestaciones espontáneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades administrativas y que se constatan en actas, y la contribuyente sólo cuestiona los criterios utilizados en la resolución recurrida limitándose a repetir argumentos expuestos en los distintos escritos, es que corresponde confirmar lo decidido por el organismo.

A mayor abundamiento, no obsta a tal conclusión, la posterior declaración jurada efectuada por el supuesto empleado ante escribano público, no resulta suficiente para desvirtuar el cargo formulado. Asimismo, cabe asignar a la primigenia declaración testimonial, prevalencia sobre posteriores rectificaciones (cfr. C.F.S.S, Sala III, sent. del 22.04.02, "Molinos Ala S.A."; íd. sent. del 28.02.03, "Recreativo Bochas Club Paraná"), atento a que el presunto trabajador puede estar obligado por el empleador a testificar en un determinado sentido.



Por todo lo expuesto y, toda vez que la parte actora efectúa una mera negativa de la existencia del vínculo laboral, pero no logra desvirtuar los fundamentos con que se dictó la resolución que recurre, corresponde confirmar la resolución recurrida de acuerdo los fundamentos expuestos precedentemente.

5) Respecto al planteo efectuado sobre la multa, esta Sala ha sostenido reiteradamente que en el caso de multas previsionales la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. El elemento subjetivo no tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razonabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor invoque y demuestre la existencia de alguna causal exculpatoria válida (cfr. “Pilot Pen S.A. c/DGI s/ Impug. de deuda”, CFSS. Sala II, sentencia del 19/10/98).

A mayor abundamiento cabe señalar que la RG 3756, reemplazada por la RG 1566 (texto sustituido en 2004) no es una norma penal, sino que como se señaló precedentemente, se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la Ley N° 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma.

La resolución General 1566/04, en su art. 5 especifica el régimen sancionatorio a aplicarse en virtud de lo dispuesto en el art. 15 punto 1 inc. c) de la ley N° 17.250. Dicha norma establece que una vez constatada la infracción por parte del organismo, se aplica una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa con relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado sin atribuir relevancia a toda circunstancia de hecho de índole subjetiva para eximir o atenuar la multa correspondiente.

El art. 15 inc. b) de la ley 17.250 además de prever el caso de falta de denuncia de trabajadores también determina multa para el caso que exista incumplimiento de la retención de aportes que deban efectuarse respecto de los trabajadores, motivo por el cual tampoco le asiste razón al apelante toda vez que se encuentra verificada la configuración de una infracción formal lo que justifica la imposición de la multa correspondiente a la infracción detectada en razón de la inobservancia por parte de la contribuyente de las prescripciones del artículo citado.

Por todo lo expuesto, no logrando conmovir el recurso interpuesto las fundamentaciones de la resolución recurrida, corresponde su confirmación.

6) Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

La Dra. Viviana Piñeiro no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el recurso; 2) Confirmar la resolución recurrida de acuerdo a las fundamentaciones expuestas precedentemente. 3) Costas por su orden.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública
—dependiente de la CSJN (conf. Ac. 10/25) y, oportunamente, remítase.

